

Todos somos incapaces

*The lunatic is in the hall
The lunatics are in my hall
The paper holds their folded faces to the floor
And every day the paper boy brings more*

Brain Damage. Pink Floyd

Carlos Ríos Espinosa¹

Todas las personas se equivocan, en ocasiones se tropiezan, compran cosas inservibles, se casan con personas equivocadas, votan por gobiernos que ponen declaraciones interpretativas a los tratados de derechos humanos; en fin, equivocarse es la condición humana. Estos yerros muestran que nuestras capacidades son siempre limitadas. En más de un sentido todos somos incapaces. Unos más, otros menos, en distinta medida siempre requerimos de apoyos. “El hombre es un dios con prótesis”, decía Freud. Si no fuera por los otros que nos ayudan con sus consejos, asesorías y apoyos diversos, muy contadas personas podrían realizar exitosamente una inversión financiera.

Yo, por ejemplo, tengo enormes dificultades para elaborar mis declaraciones de impuestos, entender el galimatías creado por el Sistema de Administración Tributaria es verdaderamente complejo, y sin la ayuda de un contador competente, probablemente terminaría en la cárcel por evasión fiscal. En fin, al igual que yo, todos, requerimos alguna vez de apoyo, de asesoría para la toma de decisiones. Ese requerimiento, claro está, no puede traducirse en que la gente trate de suplantarnos en nuestros asuntos cotidianos por nuestra falta de capacidad. Si mi contador decidiera que es mejor que no pague mis impuestos o que no deduzca impuestos por determinados rubros, con toda seguridad contrataría a otro contador. Ejercería mi autonomía, mi capacidad legal para contratar los servicios de un contador.

Entre tantos individuos que habitamos esta gran ciudad, existen quienes requieren de mayores apoyos para realizar sus actividades cotidianas. Personas que, por ejemplo, son incapaces de reconocer el significado de una sonrisa o, simplemente, no pueden reconocer los estados mentales de los otros. Estos individuos, a pesar de ser inteligentes, tendrán enormes dificultades para la interacción social, requerirán de enormes apoyos para poder realizarse como cualquier otra persona. Syd Barrett, fundador y líder del gran grupo de rock *Pink Floyd*, tenía una discapacidad de este tipo: se llama Síndrome de Asperger.

¿Qué podría llegar a sucederle a Syd Barrett si actualmente viviera en el Distrito Federal? Sencillo: se le impondría una camisa de fuerza legal. Se podría, en aplicación del artículo 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito

¹ Abogado penalista y Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Federal, declarar que Syd Barrett tiene incapacidad legal. Perdería su capacidad de ejercicio, se decretaría su estado de interdicción.

La incapacidad legal, de acuerdo con ese numeral del Código Civil, se predica de aquellos que “por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, **no puedan gobernarse**, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla.”

¿Cuáles son las consecuencias de que una persona sea declarada legalmente incapaz, en otras palabras, qué ocurriría con el Syd Barrett chilango? Syd perdería todos sus derechos civiles y políticos. Se convertiría en una persona civilmente amarrada. No podría enajenar o adquirir bienes; no podría contraer matrimonio; no podría votar, ni encargarse legalmente de los hijos que eventualmente pudiera llegar a tener. Para todos los efectos prácticos Syd dejaría de ser en realidad una persona. Claro, después los abogados civilistas vendrían a decirnos que no es cierto, que Syd perdió su capacidad de ejercicio, pero que conserva su capacidad de goce. Frente a ello tendríamos que contestar que se trata de lenguaje *orwelliano*, encubridor de la realidad. Syd dejaría de ser Syd.

La reciente apertura a firma y ratificación de la *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad* en marzo pasado, prevé un radical cambio de paradigma –del tipo de los que refiere Thomas Kuhn en su célebre obra *La estructura de las revoluciones científicas*–, para abordar el derecho a la capacidad legal. El artículo 12, párrafo 2, de este instrumento internacional reconoce –sin distinguir entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio– que las personas con discapacidad “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida”. Por su parte, en el párrafo 3, establece que “los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.”

Como puede apreciarse, la Convención abandona completamente la idea de que hay personas que no pueden gobernarse por ser incapaces para, en su lugar, prever que la capacidad jurídica es un derecho fundamental que no se puede perder. Si una persona tiene una discapacidad como la de Syd, lo que procede es proporcionarle apoyo para que pueda hacer todas esas cosas que el Código Civil capitalino hoy por hoy le negaría. ¿Cuánto apoyo? Ello dependerá de las circunstancias específicas de la persona. Seguramente requerirá algo más que un contador, pero la idea es exactamente la misma.

Si el Gobierno mexicano hubiera ratificado –sin reservas o declaraciones interpretativas– este importante instrumento internacional, la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal estarían obligadas a modificar el

diseño normativo del Código Civil para sustituir la regulación de la capacidad jurídica en el sentido explicado más arriba. No habría más camisa de fuerza legal.

Tristemente no fue eso lo que hizo el Gobierno mexicano. Introdujo en el dictamen para la ratificación de la Convención, una declaración interpretativa que palmariamente contradice su sentido esencial.

La declaración interpretativa dice:

“Consecuentemente, con la absoluta determinación de proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la legislación nacional habrá de aplicarse –en estricto apego al principio *pro homine*- la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las personas.”

¿Qué le pasará a nuestro Syd capitalino con esta declaración interpretativa? Exactamente lo mismo que le ocurriría sin la ratificación de la Convención, es decir, un juez decretaría su estado de interdicción y determinaría que, en virtud de que no puede gobernarse a sí mismo, hay que nombrarle un tutor que le “confiera mayor protección legal, salvaguarde su dignidad y asegure su integridad física, psicológica, emocional y patrimonial.” Le pondría la camisa de fuerza legal y lo suplantaría con otra persona.

El sustento jurídico del dictamen que introdujo la declaración es francamente paupérrimo. Claro que el Gobierno de México, en ejercicio de la soberanía, puede decir que lo blanco es negro al ratificar un tratado internacional -siempre que el tratado lo admita, por supuesto-, no obstante, tanto desde una perspectiva ética como democrática está obligado a decirnos por qué, y no tratar de chicanearnos haciendo malabares con términos jurídicos. La mentada declaración interpretativa es en realidad una reserva.

En tanto los políticos siguen jugando a ser progresistas, esperaremos a que el muchacho del periódico, como dice la canción de Pink Floyd, nos deje sus caras dobladas en el pasillo, y escucharemos a Syd Barrett.